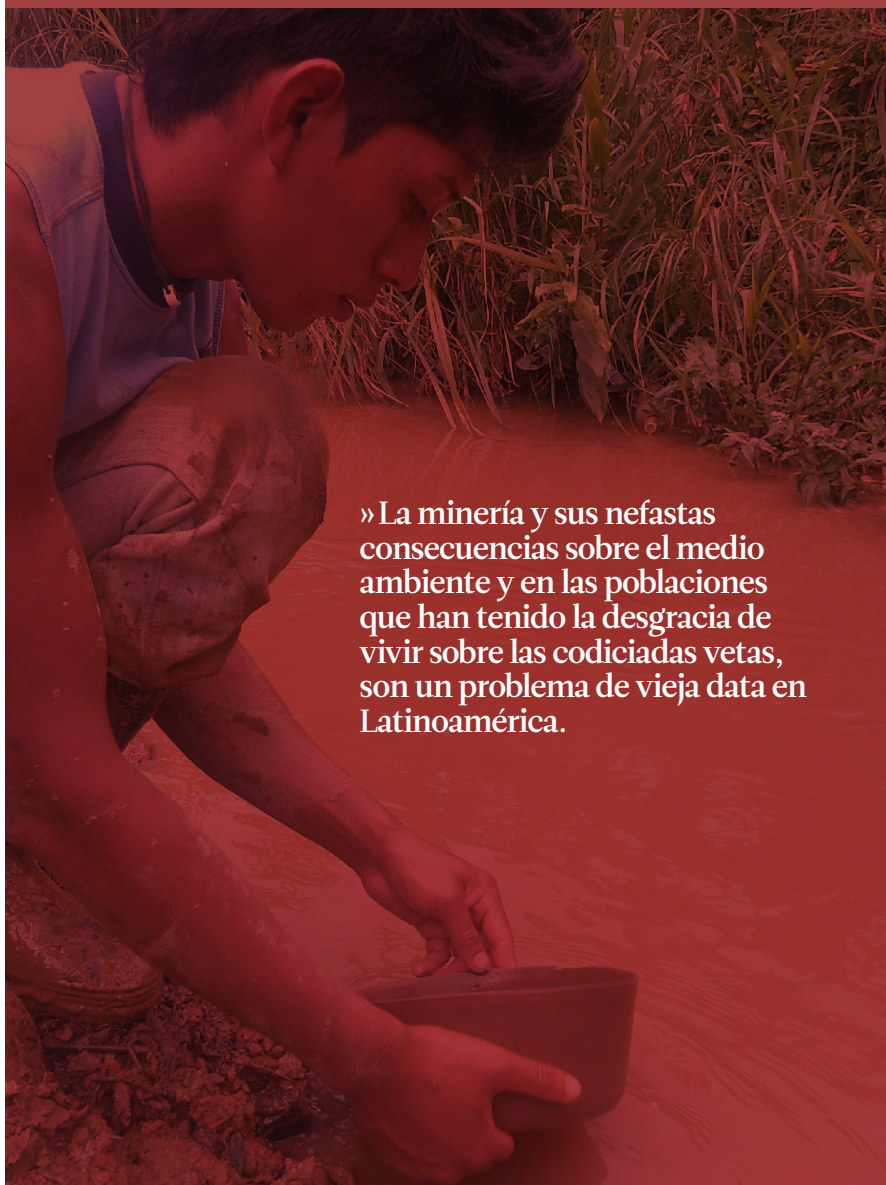




La resurrección del mito de El Dorado



» La minería y sus nefastas consecuencias sobre el medio ambiente y en las poblaciones que han tenido la desgracia de vivir sobre las codiciadas vetas, son un problema de vieja data en Latinoamérica.

Oro maldito

● En Nicaragua ese era un tema que no tenía repercusiones como en otros países de la región centroamericana y Sudamérica, pero los conflictos en la mina Santa Pancha y más recientemente en Santo Domingo, revelan que las cosas están cambiando, sobre todo porque el gobierno ahora incluso promueve abiertamente oportunidades para la minería canadiense.

El oro, o más bien su ávida búsqueda, ha sido una maldición permanente para nuestros pueblos originarios. Los colonizadores movidos por la codicia, esclavizaron y diezmaron a las poblaciones indígenas en todo el continente para exprimir las riquezas minerales. El mito de El Dorado alimentó los sueños febriles de riqueza y se instaló hasta el día de hoy como el símbolo nunca alcanzado del tesoro prometido. Dos siglos después de la independencia de América, sorprende que los gobiernos independientemente de su signo ideológico perseveren en el mito, esta vez bajo una nueva bandera del desarrollo. La destrucción y el desalojo de comunidades campesinas e indígenas, así como la destrucción del medioambiente es el nuevo precio de El Dorado, ahora con el beneplácito de los propios nacionales.



Durante la colonia, como es sabido, la búsqueda de oro tenía el claro objetivo de financiar la conquista y colonización del Nuevo Mundo y de las almas, recompensar los esfuerzos individuales de los conquistadores y facilitar la constitución de los nuevos imperios europeos. Según se dice, uno de los primeros embarques de oro salidos de América sirvió para retocar el techo de la iglesia Santa María Maggiore en Roma, regalo del emperador Carlos I de España al papa Alejandro VI, mejor conocido como Rodrigo Borgia. Aun se puede observar el peso del metal curvando la estructura de madera en la basílica.

¿Cuál es el objetivo del actual boom de la extracción de oro en América Latina? Una respuesta simple sería que el alto precio del metal en una coyuntura financiera mundial crítica, hace de su explotación un excelente negocio. Sin embargo, la respuesta, por obvia, es apenas una mentira piadosa. Hace tiempo que el metal amarillo dejó de ser reserva absoluta y valor refugio por una razón fundamental: el mundo ha cambiado y la conservación de recursos naturales es hoy una reserva más importante y estratégica. El oro ya no compra todo, salvo a las elites y empresas transnacionales asociadas que mantienen artificialmente el negocio. Hay que tomar en cuenta que el noventa por ciento del oro se usa en la industria de joyería, casi nada ya se convierte en las conocidas barras que se guardan en los bancos y servían como garantías de la riqueza de las naciones. Un porcentaje mucho mejor es para uso científico o tecnológico. En otras palabras el oro no sirve para otra cosa que la ostentación decorativa.

La confección de un anillo implica la remoción de veinte toneladas de suelo y cada onza de oro arroja cien toneladas de desechos tóxicos. De ahí que la contrapartida al lujo y la ostentación es el impacto ambiental y social que produce la minería en los territorios donde se practica. Comunidades desplazadas, contaminación irreversible, pérdida de soberanía nacional en las zonas de explotación, represión y conflicto a las comunidades que se oponen, son algunas de las expresio-

nes sociales más evidentes. Diez países se distribuyen en el mundo las más grandes capacidades de producción, y de ellos siete aumentaron su producción durante los últimos dos años.

País	Producción (Ton)	Tendencia
China	355	++
Australia	270	++
Estados Unidos	237	++
Rusia	200	++
Sudáfrica	190	++
Perú	150	--
Canadá	110	++
Ghana	100	++
Indonesia	100	--
Uzbekistán	90	--

Muller, Marion. www.oroym Finanzas.com

Tres minas aumentaron su volumen de explotación a nivel mundial: Veladero, en Argentina; Cortez, en Estados Unidos y Boddington, en Australia. En América Latina once países se distribuyen el potencial de producción aurífero, en la mayoría de los casos bajo control extranjero, particularmente canadiense.

País	Recursos por explotar (%)
Chile	29
México	15
Perú	11
Colombia	11
República Dominicana	8
Brasil	7
Ecuador	7
Guyana	5
Argentina	3
Venezuela	1
Otros	3

Muller, Marion. www.oroym Finanzas.com

En casi todos estos países existen fuertes conflictos entre comunidades, gobiernos y empresas, que estás últimas tratan de ocultar, cooptar y en última instancia reprimir con la complicidad de los gobiernos. El ocultamiento y la cooptación se realizan a través de lo que hoy se conoce como “responsabilidad social empresarial” y que incluye la financiación de proyectos sociales, becas educativas, proyectos culturales y sobornos a líderes locales corruptos y hambreados. Mu-

chos de estos conflictos tienen, y han tenido, desenlaces dramáticos con poblaciones enteras desalojadas, criminalizadas, represión, muertos, heridos, desaparecidos y clandestinidad. En Centroamérica, las comunidades indígenas guatemaltecas conocen bien estas estrategias.

La deshilada bandera del desarrollo

En este contexto resulta sorprende que gobiernos abanderados de progresistas justifiquen la explotación aurífera y minera, en general. No debería de extrañar de los empresarios y sus lobbies, pero si es difícil de comprender que gobiernos con discursos anti neoliberales apoyen este tipo de explotaciones a costa de colocarse en contra de los propios intereses nacionales y los de sus comunidades.

La evidencia empírica demuestra que a los países con explotaciones mineras en realidad no les queda nada o muy poca ganancia para financiar el desarrollo puesto que los regímenes de explotación son liberales, en materia tributaria y repatriación de ganancias. Por otro lado, los costos ambientales son irreversibles y los daños sociales nunca podrán ser compensados por la “responsabilidad social de las empresas”. Como se dijo antes, los daños ambientales y sociales, son irreversibles.

Dos hipótesis pueden plantearse para encontrar las respuestas tras la falacia desarrollista. Una, que nuestros países permiten una actividad predatoria a cambio de atraer capital externo en otros rubros. La otra, que este tipo de actividad constituye una evidente fuente de enriquecimiento para las elites criollas. La primera es perversa porque se trata de un impacto negativo que afecta a otros rubros claves. Si el agua es contaminada se afecta el consumo humano, la agricultura, la ganadería, la viabilidad de territorios y comunidades. Ningún país es tan grande como para ignorar durante un tiempo lo que pasa y procurar evitar el encadenamiento de efectos negativos. De ahí que otra hipótesis posible de aceptar es que las concesiones y negocios auríferos sólo enrique-

cen a unos pocos en el país y en el extranjero, tal como resulta evidente en Perú, Chile y Argentina.

La fiebre del oro llega a Nicaragua

Una nueva fiebre del oro, y la minería, parece adueñarse nuevamente de Latinoamérica y países como Nicaragua o República Dominicana se están contaminando con ella. De acuerdo con el diputado Enrique Sáenz, del MRS, la producción de oro en Nicaragua dejó de ser significativa desde la década de 1950, pero durante los últimos años se ha incrementado sustancialmente hasta alcanzar el tercer lugar en las exportaciones nacionales. El incremento se ha producido tanto en el monto como en el volumen, pasando de 208 millones de dólares en 2011 a 422 en 2012, y de 179 a 258 mil onzas en el mismo período. Mientras el Centro de Trámites para las Exportaciones, CETREX, reporta que en el año 2012 se exportaron 188.3 millones de dólares en oro bruto a Canadá y 126.6 a Estados Unidos.

En el 2012 el precio de exportación de la onza de oro nicaragüense ascendía a 1,650 dólares, mientras que el costo de producción fue de 550 dólares. De acuerdo con el diputado Sáenz, el meteórico incremento en la producción del oro en el país se debe al aumento de los precios internacionales, pero más que alegrar estos hechos deben generar alarma, sobre todo por los nocivos efectos sociales que ya están generando entre comunidades empobrecidas y ahora, reprimidas.

La alarma ha sonado tempranamente y bastante fuerte en dos ocasiones durante los últimos meses. La primera vez fue en noviembre del 2012, cuando en el poblado de Santa Pancha se produjo el derrumbe de una vieja mina que ocasionó la muerte de una joven y se desencadenó una protesta de mineros y pobladores contra la compañía minera B2Gold que duró varios días y provocó fuertes enfrentamientos entre policías y pobladores. Un año antes de eso un grupo de mineros fueron víctimas de un derrumbe y uno de ellos falleció. En los dos casos, tanto los pobladores como los mineros



acusaron a la compañía de no cumplir con las normas de seguridad laboral en la mina.

Un caso similar se produjo en Santo Domingo, Chontales, cuando un grupo de pequeños mineros y habitantes del poblado organizaron una protesta contra la compañía B2Gold operaria de la mina. La protesta fue desmontada con una operación policial realizada al filo de la madrugada el 08 de febrero de este año, con el resultado de unas 40 personas lesionadas, un grupo no determinado que huyó a las montañas aledañas y 47 detenidos. Sin mayores explicaciones, los obreros fueron trasladados a Managua y enjuiciados hasta que en una negociación bajo presión, otro grupo de ellos junto con pobladores de Santo Domingo terminaron firmando un acuerdo con la compañía minera. Los mineros enjuiciados fueron “beneficiados” con el arresto domiciliario y varios de ellos denunciaron que mientras estuvieron detenidos fueron sujetos de torturas y presiones.

De acuerdo a diversas fuentes la principal accionista de las concesiones mineras en Nicaragua es la compañía de origen canadiense B2Gold. De acuerdo a declaraciones públicas del presidente del COSEP, la empre-

sa ya invirtió en el país 320 millones de dólares y se espera que a finales del 2013 esa cifra ascienda a 400 millones. Recientemente, otra compañía de origen colombiano adquirió la mayoría de las acciones de una de las más importantes concesiones mineras. Del lado del gobierno mientras tanto, se hacen importantes esfuerzos para promover las inversiones canadienses para la explotación minera, tal como lo demuestra el video promocional de ProNicaragua presentado en la convención anual de PDAC, uno de los más importantes eventos canadienses sobre minería (<http://www.youtube.com/watch?v=hXdCz6-MHsg&feature=share>), pero además con el excepcional tratamiento policial y judicial al caso de los mineros de Santa Pancha y Santo Domingo.

Vale la pena mencionar que los más importantes conflictos mineros en Centroamérica y en algunos países sudamericanos tienen como protagonistas a compañías canadienses, de tal manera que diversas organizaciones y universidades de ese país muestran una gran preocupación por la forma en que estas compañías realizan las explotaciones mineras en estos territorios y por el grave daño que están provocando al medioambiente.

Crisis civilizatoria y viejas luchas

En la explotación aurífera se cruzan dos tendencias que revelan la crisis civilizatoria mundial y del modelo que estamos viviendo, así como la necesidad de pensar las transiciones necesarias hacia un nuevo modo de vida. Por un lado, la idea obsoleta de que alcanzar el desarrollo justifica cualquier actividad que produzca ganancia mercantil; y por otro, las nuevas luchas sociales que evidencian una conciencia emergente y la urgencia de sobrevivencia que tienen hoy territorios y comunidades.

Las comunidades víctimas de la minería han luchado desde siempre contra el despojo, la explotación y la depredación del medioambiente. La larga historia de los conflictos desde la colonia hasta hoy da cuenta de estas luchas, especialmente en Sudamérica y Centroamérica. Las supuestas ventajas de la globalización y la creciente conciencia planetaria sobre la protección del medioambiente no han sido suficientes para frenar la explotación y, en consecuencia, disminuir la resistencia de las comunidades frente a ella.

La solución no es una racionalización del capitalismo depredador, salvaje o inhumano como les gusta decir a algunos; tampoco un cambio de propiedad privada por estatal, como imaginan otros. Una propuesta duradera de solución involucra un cambio de largo aliento en las formas y resultados de la producción y el consumo humano. A partir de allí muchas armas del viejo arsenal desarrollista deben ser destruidas y sustituidas por instrumentos regulatorios, políticos y tecnológicos que refuercen la transición al cambio que puede ser simultáneo en todas las áreas pero en el caso del oro debería ser inmediato.

El debate que comenzó con la idea de sostenibilidad para los modelos de desarrollo se ha profundizado en la búsqueda de nuevos modos de organización social. Hay algunos ejemplos interesantes. Esquel, una comunidad en el sur de la Argentina, celebra haber cancelado un proyecto de explotación aurífera después de una larga lu-



cha y con un referéndum ciudadano. El Salvador también ha dado un ejemplo reciente suspendiendo toda concesión y explotación minera, incluyendo la explotación aurífera, mientras no existan capacidades de regulación y evaluación. Pascua-Lama, un faraónico proyecto minero entre Chile y Argentina, está bajo el fuego de la crítica y la denuncia que aspira a cancelarlo. Aunque todavía algunas iniciativas son experimentales, pasar a una fase de aplicación a gran escala significa que políticas, sociedades y gobiernos deben expresar claramente su intención de avanzar en esa dirección.

La aventura desarrollista en clave depredadora y antropocéntrica se encuentra en una fase donde sus costos se han incrementado y ha puesto en

peligro al supuesto objeto de sus acciones: los seres humanos. Los esteriores alimentados por potencias como China, Estados Unidos o Canadá pueden ser catastróficos, por esa razón, la apertura a una alternativa de los modelos extractivos intensos es una cuestión de política urgente a escala planetaria y particularmente para Latinoamérica. En Nicaragua, a menos que el gobierno quiera enfrentarse en el corto plazo con graves conflictos como los que viven las comunidades indígenas de Guatemala, ese cambio tiene que arrancar desde ya y hacerse coherente con su discurso a favor de los pobres, del vivir bonito y en contra del capitalismo salvaje, del cual, la explotación aurífera es una de sus expresiones más crudas.